

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan, por el C. Domingo Evia, contra el Agente de la Hacienda pública de Izamal, que le cobra con apremio las contribuciones relativas á sus Haciendas «San Antonio» y «Buena-vista».

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El C. Domingo Evia ocurre á usted por medio del escrito que va al frente de estas diligencias, pidiendo que lo ampare y proteja contra los actos del titulado agente de la Hacienda pública del Estado, que sin tener este carácter legítimo le ejecuta al pago de unas contribuciones, adeudadas por sus fincas rústicas denominadas «San Antonio» y «Buena-vista» de la comprension del partido de Izamal, en donde ejerse sus funciones aquel empleado.

El recurso se funda en el art. 16 de la Constitucion de la República que el quejoso cree violado con los referidos actos, porque dice que no siendo legítima la autoridad de quien los ejecuta, á causa de derivarla del C. Tesorero general del mismo Estado cuyo origen tambien es nulo y vicioso, no puede tener la competencia que es necesaria para proceder constitucionalmente contra él.

Sin negar los hechos que se reclaman, el Agente de Izamal alega en su informe sobre ellos que no es procedente el amparo intentado "porque se funda únicamente en la ilegitimidad de las autoridades del Estado, sobre lo cual no tiene facultad de resolver ni usted ni ninguna otra autoridad federal, sin conculcar la Soberanía del Estado", que son las frases con que termina aquel documento informativo, y en las cuales se condensa la justificación de su autor. Mas está en un error al suponer que no hay poder federal que tenga derecho de conocer de los amparos intentados contra autoridades ilegítimas

porque ya la Suprema Corte de Justicia ha probado con razones clásicas emitidas en diversas ejecutorias, que bien puede y debe, en uso de sus facultades constitucionales, otorgar los amparos que se pidan á la Justicia de la Union, aun cuando sea contra las autoridades usurpadoras, que nunca han de tener en la falsedad de sus títulos un bill de indemnidad que los haga de mejor condicion que las verdaderas y legítimas; y ejerce ese elevadísimo Tribunal de la Nacion tan augusto derecho, precisamente para hacer efectiva la Soberanía de los Estados, y evitar que en nombre de ella se consagre la usurpacion de sus falsos apóstoles.

Por lo que hace á Yucatan, es bien público, y suficientemente demostrado hasta en el seno mismo del Congreso de la Union, que el pueblo no ha sido consultado para darse los poderes legislativo, ejecutivo y judicial que de su voto libre debian emanar, y que hoy existen solo por el imperio de la fuerza física, á la cual deben su origen y apoyo. Si, pues, el Poder judicial de la federacion es competente para conocer y decidir de los amparos contra los actos de una autoridad incompetente de cualquier denominacion que sea, y siempre que violen las garantías individuales las legítimas y competentes; si el Agente de la Hacienda pública no es legítimo ni competente para cobrar las contribuciones que exige en Izamal por que deba su encargo al Ejecutivo del mismo, como confiesa en su informe, y que este no puede dar la legitimidad y competencia de que carece por haber tomado su título de Gobernador, de la minoría de la Legislatura, que no tenia facultad de conferirlo á nadie; y, á pesar de todo, el referido Agente ejecuta el pago de las contribuciones que motiban el presente juicio, y no hay duda que en la persona del quejoso se viola con esos actos la garantía individual otorgada en el art. 16 de la Constitucion de la República; con cuyo fundamento, del art. 101 del propio Pacto federal, y 1º, frac. 1º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, el infrascrito pide á

usted declare: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Domingo Evia contra los actos del Agente del Erario del Estado en el partido de Izamal, en virtud de los cuales le cobra y ejecuta lo que adeuda de contribuciones por sus Haciendas «San Antonio» y «Buénavista», sin tener la autoridad legítima y competente que es indispensable para tal procedimiento.

Mérida, Setiembre 7 de 1874.—*Prudencio Higueros.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mérida, Setiembre 7 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Domingo Evia, contra el Agente de Hacienda pública del partido de Izamal, que con violacion del art. 16 de la Constitucion federal le cobra con apremio las contribuciones causadas por sus fincas rústicas «San Antonio» y «Buénavista», situadas en la comprension de aquel partido. Visto lo informado por dicho Agente de Hacienda pública; el pedimento del C. Fiscal; la citacion para sentencia, con cuanto mas ver y tener presente convino, y

Considerando: que el referido Agente de Hacienda pública, ejerce las funciones de empleado dependiente de la Tesoreria general del Estado;

Considerando: que conforme á la frac. 13 del art. 34 de la Constitucion particular del Estado, al poder Legislativo compete nombrar al Tesorero general; y fundada en esta disposicion, la minoría del 5º Congreso nombró al actual Tesorero, derivando ésto, en consecuencia, su nombramiento, de una autoridad ilegítima, segun es público y notorio y lo ha declarado la Suprema Corte de Justicia, en varias ejecutorias de amparo.

Considerando: que por esta razon el Tesorero del Estado no es autoridad legítima, ni pueden serlo sus dependientes, careciendo, por tanto, de competencia constitucional; y no pudiendo, por lo mismo, ejercer las fun-

ciones de recaudar los impuestos que la Constitucion y las leyes encomiendan á las autoridades legítimas, violando al pretender hacerlo, el art. 16 constitucional, y dando motivo al amparo por razon de ilegitimidad, como en el presente caso.

Por lo expuesto y de conformidad con el parecer fiscal, fundado en el citado art. 16, en el 101 de la Constitucion federal, y 1º frac. 1º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, la autoridad, en nombre de los Supremos Poderes, falla:

1º La Justicia de la Union ampara y protege al C. Domingo Evia, contra los autos del Agente de Hacienda pública del partido de Izamal, que con violacion del art. 16 de la Constitucion, le cobra, con apremio, las contribuciones causadas por sus fincas rústicas «San Antonio» y «Buénavista».

2º Sáquese testimonio de este fallo para publicar, y elévase los autos, en revision, la Corte Suprma de Justicia nacional, arreglado á los arts. 13 y 27 de dicha ley orgánica. Hágase saber.—*I. Manzanilla.*—Ante mí.—*José Anacleto Castillo.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 10 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan, por el C. Domingo Evia, contra el Agente de la Hacienda pública de Izamal, que le cobra con apremio las contribuciones relativas á las Haciendas «San Antonio» y «Buénavista»; y

Considerando: Que los agentes del Tesoro general del Estado, no tienen autoridad legítima para desempeñar funciones públicas con aquel carácter, porque dicho Tesorero fué nombrado por una minoría de la Legislatura del mismo Estado, y que por lo mismo, el cobro de que se trata vulnera la garantía á que se refiere el art. 16 de la Constitucion general; de conformidad con el 101 de la misma, se decreta:

Que se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia pronunciada respecto de este juicio á 7 de Setiembre último por el Juzgado de Distrito de Yucatan, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Domingo Evia, contra los actos del Agente de Hacienda pública del partido de Izamal, que, con violacion del art. 16 constitucional, le cobra con apremio las contribuciones causadas por sus fincas rústicas «San Antonio» y «Buenavista».

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*J. José de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José S. Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José G. Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario

Es copia que certifico. México, Noviembre 20 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan, por la casa de comercio que gira en Mérida bajo la razon social de "Francisco Diego y Compañía," contra los actos del C. Tesorero municipal del puerto de Progreso, que le cobra 12½ ctvs. por cada uno de 412 cerdos, embarcados para la Habana.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

La casa mercantil que gira en esta Ciudad bajo la razon de "Francisco Diego y
TOMO VII.—PARTE II.

Compañía", pide amparo en el ocurso que motiva este juicio, contra el acto de haberles cobrado el C. Tesorero municipal de Progreso doce y medio centavos por cada uno de cuatrocientos doce cerdos, que embarcaron en aquel puerto con destino al do la Habana; y cuya cantidad ascendente á sesenta y cuatro pesos cincuenta centavos, fué satisfecha en obvio de mayores perjuicios, como se hizo constar en la adjunta protesta.

El fundamento del ocurso consiste, en que aunque ese impuesto ha sido establecido por el Gobierno del Estado con el título de arbitrio municipal, es en realidad un verdadero derecho de exportacion que la fraccion 1ª del artículo 112 del Pacto federal prohíbe establecer sin consentimiento del Congreso de la Union; y que si con dicha contribucion se viola este artículo constitucional, con su cobro se infringe también la garantía que otorga el artículo 16 del propio Código fundamental de la República.

El Tesorero de los fondos municipales de Progreso contra quien se reclama este hecho, se limitó á rectificar el número de los cerdos por los cuales cobró el impuesto de que se trata, alegando que no fué por unos trescientos catorce como aseguran los quejosos, sino por cuatrocientos doce; pero conviniendo en que fueron embarcados por el vapor español "Don Quijote", y sin exponer una sola razon siquiera en defensa del decreto en virtud del cual hizo el repetido cobro, cuya anticonstitucionalidad parece que el mismo reconoce al concluir su informe, diciendo: "que si ha habido infraccion en las leyes que citan los quejosos, bien se deja ver que la culpa no ha sido suya".

X en verdad que no podia decir otra cosa; porque, en concepto del Fiscal, siendo demasiado clara y terminante la prohibicion hecha á los Estados, en la cláusula 3ª del artículo citado, de establecer derechos de exportacion sin el consentimiento del Congreso Nacional, es incontrovertible la infraccion que de él se ha hecho con el referido decreto local que impone el gravámen reclamado